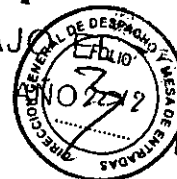


Poder Judicial de la Nación

SALA "A"
REGISTRADO BAJ
Nº 749 FOLIO 992



"ESTADO NACIONAL, MINISTERIO DE ECONOMÍA, TELEFÓNICA S.A., ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., SINTONIA S.A., SINTONIA S.P.A., INTESA SANPAOLO S.P.A., MEDIOBANCA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A. Y OTRO (S) SOBRE AMPARO"

Causa Nº 63.598 - Folio 213 - Nº de Orden 28.141, Juzgado en lo Penal Económico Nº 3, Secretaría Nº 5; Sala "A".

mv (mel)

///nos Aires, 12 de noviembre de 2012.

VISTOS:

Los recursos de apelación interpuestos por el abogado que actúa en representación de la Asociación de Defensa de la Competencia y por el mismo abogado en representación de AMX ARGENTINA S.A. actuando conjuntamente con el abogado que representa a TELMEX ARGENTINA S.A. contra la resolución del juez de primera instancia que no hizo lugar a las demandas de amparo deducidas en nombre de sus representadas.

CONSIDERARON:

Los Dres. Hendler y Repetto:

Que se trata en el caso de una acción encaminada a invalidar o bien dejar sin efecto una resolución dictada por la autoridad en materia de defensa de la competencia por la que se admitió, imponiéndole ciertas condiciones, una operación de concentración económica entre empresas del ramo de las telecomunicaciones.

Que en respuesta al informe recabado por el juez, el abogado que representa al Estado Nacional – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se opuso al progreso de la acción cuestionando la pertinencia de la vía del amparo y sosteniendo la legitimidad de la resolución impugnada así como su eficacia para resguardar la competencia señalando que la demanda se basa en meras hipótesis de que esta última pueda ser afectada.

Que el juez *a quo* desestimó la acción por entender que el proceso sumario de un amparo tramitado de acuerdo con la ley 16986 resulta inapropiado para probar los hechos en que se basa y para ponderar las complejas cuestiones económicas y jurídicas implicadas en la demanda. Señaló de todos modos que no se habían indicado concretos hechos anticompetitivos acotando la insignificancia del porcentaje accionario de la

CECILIA A. ROCCA

ABOGADA
CPAC 112 F 451

USO OFICIAL

empresa que fue adquirido por su principal competidora así como que la resolución impugnada resulta en principio apta para los fines a los que fue dictada.

Que los apelantes se agravian de que no se haya admitido su demanda en tanto sostienen que la operación en cuestión es, en sí misma, restrictiva de la competencia. Sostienen que las condiciones impuestas por la resolución del Secretario de Política Económica cuya anulación requieren, son ineficaces y resultan insuficientes para resguardar el derecho de libre competencia. Hacen hincapié en que no se habrían fijado plazos de cumplimiento.

Que la legislación de la materia en nuestro país se originó en 1923 con la ley 11210 a la que siguió la llamada "Ley de monopolios", 12906, dictada en 1946. Ambas leyes se inspiraban en la legislación estadounidense conocida como "*antitrust*" iniciada con la ley Sherman de 1890 y establecían, fundamentalmente, la sanción de los monopolios y los intentos de monopolización. A partir de 1981, con la ley dictada por el gobierno de facto de ese entonces, 22262, se modificó la orientación señalada adoptándose en cambio las modalidades de la legislación europea en la que se sancionan, fundamentalmente, los hechos de abuso de predominio prescindiendo de reprobación, en sí misma, la concentración empresarial. Esa orientación fue mantenida en la ley dictada por el Congreso en 1999, 25156, actualmente vigente. De conformidad con esta última las fusiones empresarias, que estaban expresamente sancionadas en el artículo 2° inciso m de la ley 12906, dejaron de configurar tipos delictivos en sí mismos. Sólo se mantiene la prohibición de concentraciones económicas que puedan restringir o distorsionar la competencia con perjuicio del interés económico general (artículo 7° de la ley 25156). Se contempla a ese fin un temperamento preventivo imponiendo la obligación de comunicar a la autoridad de control los actos de concentración empresarial y atribuyendo a esa autoridad la facultad de desautorizarlos o bien imponerles el cumplimiento de condiciones para su autorización (conf. artículo 13 ley 25156).

Que esto último es lo decidido por el Secretario de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en la resolución cuya revocación o anulación se persigue con las demandas. Se sigue en

consecuencia que esa resolución, con prescindencia de su mérito o acierto, no puede entenderse que se encuentre viciada de "ilegalidad manifiesta".

Que si bien es cierto que la participación accionaria en el capital de una de las dos principales competidoras en el ramo de las telecomunicaciones, adquirida por la otra, por mínima que sea, genera el riesgo de actos anticompetitivos, eso no alcanza, por sí solo, para afirmar que sea "inminente" la realización de esa clase de actos.

Que tampoco cabe entender que lo resuelto sea una "arbitrariedad manifiesta". Por más que pueda resultar criticable o desacertado el criterio adoptado al autorizar la concentración económica o al fijar los términos del compromiso, no se trata de una determinación a la que quepa revisar en sede judicial. Las abstenciones que se imponen no pueden estar subordinadas a plazo alguno y lo mismo ocurre con los deberes establecidos bajo condiciones suspensivas o resolutorias. En cuanto a las obligaciones de hacer, las cláusulas identificadas como 2.7 a 2.26 establecen los plazos en que deben cumplirse o acreditarse su cumplimiento.

Que de todos modos, la aprobación acordada no confiere ninguna clase de inmunidad ni impide controlar y, en su caso, sancionar, los hechos que resulten restrictivos o distorsivos de la competencia. La sola comunicación de la concentración económica impuesta por la ley implica alertar a la autoridad de control a la que incumbe evitar hechos de esa índole.

Que se concluye, en consecuencia, que no concurren en el caso los extremos que el artículo 43 de la Constitución Nacional establece para que proceda el amparo tendiente a proteger el derecho a la competencia. No se está frente a un acto manifiestamente arbitrario ni ilegítimo ni surge, por más que pueda presagiárselo, un comportamiento anticompetitivo "inminente".

Que es lamentable, de todos modos, que la autoridad a la que correspondió intervenir y que tendrá a su cargo el futuro control no se encuentre conformada con las características establecidas en la ley, es decir con la integración cuidadosamente seleccionada de integrantes especialmente preparados e independientes que requieren los artículos 18 y 19 de la ley 25156. Esas disposiciones se encuentran incumplidas pese a haber transcurrido más de doce años desde que se sancionó la ley, lo que ha sido puesto de manifiesto en varios precedentes de este tribunal.

CECILIA A. BOSCA
ABOGADA
CPAC F. 112 F. 451

USO OFICIAL

598/09, 10/10, 15/11 y 16/11 de Sala A y 742/11 y 335/12 de Sala B) en los que se dispuso cursar comunicación, por intermedio de la Corte Suprema Nacional, a fin de que el Poder Ejecutivo dicte las correspondientes reglamentaciones, lo que corresponderá reiterar una vez más en este caso.

Que si bien esta última cuestión no ha sido el fundamento de las demandas es comprensible que a raíz de ella los demandantes se hayan considerado con derecho a litigar por lo que deben ser eximidos del pago de las costas.

El Dr. Bonzón:

1) **CUESTIONES PREVIAS:** Antes de analizar el caso apelado, considero necesario formular dos circunstancias jurídicas que, en mi opinión, condicionan *ab-initio* el resultado a que se arribará. Ellas son:

1.1- **Distintos procedimientos previstos en la Ley 25.156:** la Ley 25.156 prevé dos tipos de procedimientos: uno administrativo preventivo denominado por la doctrina como "control de estructuras" y otro penal infraccional de conductas anticompetitivas. Ambos procedimientos tienen diferencias y características comunes, que han dado lugar a la pretensión de aplicar uno u otro procedimiento, según la conveniencia económica-política del pretensor y lo que es aún peor, intentar una mezcla de los mismos alegando infundadamente el principio del debido proceso. Entre las diferencias pueden citarse las siguientes:

a) El procedimiento de concentraciones es de tipo administrativo e informal, no contradictorio, sustancialmente inquisitivo y está previsto en reglamentos que autoriza la propia ley (artículos 11 y 12). Por el contrario, el procedimiento sobre averiguación de conductas concretas anticompetitivas, es contradictorio e interactúan en él "partes" contrapuestas (la acusación y la defensa) y está reglado expresamente por la propia ley (artículos 26 a 45 inclusive), y se le aplican supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Penal, en cuanto sean compatibles (artículo 56 de la ley).

b) El primer procedimiento preventivo, comienza con una notificación (artículos 8 de la Ley 25.156 y 8° de su Decreto Reglamentario 89/2001) y se realiza conforme lo reglado por su artículo 11, y la "guía para la notificación de operaciones de concentración económica" (resolución 40/2001 del Secretario de Defensa de la Competencia y el Consumidor). Asimismo, el



Poder Judicial de la Nación

citado artículo 8° del decreto 89/2001 obliga a la autoridad de aplicación, a establecer un mecanismo de opinión consultiva "voluntaria", a los fines de determinar si una operación está sujeta al control previo previsto en el artículo 8° de la Ley 25.156. Asimismo, la ex-Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor (actual Secretaría de Comercio Interior), dictó la resolución 164/2001, por la cual aprueba los "Lineamientos para el control de las concentraciones económicas", que si bien son normas orientativas, sirven para hacer más previsible el procedimiento. Por el contrario, el procedimiento de investigación de conductas antimonopólicas, comienza de oficio o por denuncia efectuada por cualquier persona, y está solamente reglamentada por la ley (artículos 26 a 45 inclusive) y complementado por el decreto reglamentario 89/2001 (artículos 26 a 45 inclusive).


c) El primer procedimiento preventivo, prevé la subordinación de la autorización de concentración al establecimiento de alguna condición (artículos 13 inciso b- de la Ley 25.156 y 13 de su Decreto Reglamentario 89/2001); en forma similar pero no idéntica, el procedimiento de conductas prevé en el artículo 36 de la Ley 25.156, la formulación de un compromiso que implique el cese inmediato o gradual de los hechos investigados o la modificación de los aspectos relacionados con ellos.

d) El primer procedimiento preventivo permite que, ante el incumplimiento de lo dispuesto por la autoridad de aplicación, ésta solicite al juez competente las medidas cautelares que estime pertinentes (artículo 24 inc. m- de la Ley 25.156). El procedimiento de análisis de conductas anticompetitivas, además de la facultad descripta para el procedimiento preventivo (medidas cautelares), puede imponer directamente, en cualquier estado del procedimiento, el cumplimiento de condiciones que establezca u ordenar el cese o la abstención de la conducta lesiva, que de causar una grave lesión al régimen, puede dar lugar a toda otra medida tendiente a evitar dicha lesión (artículo 35 de la Ley 25.156).

Uno de los problemas aún no resuelto en forma definitiva que da lugar a múltiples y contradictorias opiniones, es lo referente a si el control de un compromiso o condicionamiento firmado y autorizado por la autoridad de aplicación, puede ser objeto de uno u otro procedimiento.

Cecilia A. Rocca
CECILIA A. ROCCA
ABOGADA
CPACF T° 112 F° 451

USO OFICIAL



En lo relacionado con el artículo 13 inciso b) de la Ley 25.156 (aprobación con condiciones), pueden suceder, en mi opinión, dos resultados fácticos:

a) Que la condición fijada para autorizar la concentración por parte de la autoridad de control no sea eficaz o idónea para prevenir el daño efectivo en la competencia de un mercado. En tal situación cualquier persona puede denunciar el daño que pasó de ser potencial a real, conforme lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 25.156;

b) Que las empresas concertantes no cumplan con la condición impuesta para autorizar la concentración, situación en la cual, aún sin daño real (solamente potencial), la autoridad de aplicación podrá denegar la autorización, o revocarla según el caso. Si tal incumplimiento implica una lesión real al bien jurídico protegido por la Ley 25.156, cabe igual solución que el punto anterior para cualquier perjudicado, conforme al artículo 26 citado.

Puede deducirse, también en mi opinión, que el acuerdo de los concertantes autorizados por el Estado, sin que aún cause un daño concreto a la competencia, no pueda ser impugnado por cualquier persona, hasta que no se exteriorice en un daño concreto al mercado. Solo cabría la posibilidad de que si ese condicionamiento aprobado fuera manifiestamente arbitrario e ilegal, sea impugnado conforme la vía del amparo, previsto por el artículo 43 de la Constitución Nacional.

1.2- Acción de amparo: La reformulación constitucional de la acción de amparo por el artículo 43 de la Carta Magna, configura un importante avance con relación a las normas de la Ley 16.986. Ya la procedencia del mismo no es excepcional y restrictiva, no exigiéndose como antes la inexistencia de otros remedios administrativos o judiciales, sino que es ahora procedente, si es el medio más idóneo para defender el derecho conculcado, en su comparación con otros procesos judiciales.

Como difícil es determinar en el análisis del caso concreto cuál es la vía procesal más idónea, no puede descartarse el amparo si este se ajusta a las reales necesidades del amparista en defensa de sus derechos; pero también debe ponderarse la real posibilidad del juez de otorgar la debida tutela jurisdiccional mediante esta vía.

Dentro del sistema restringido dado por nuestra Constitución para comparar la idoneidad del amparo con otras vías procesales judiciales, no debe hacerse solamente con el proceso ordinario, sino también con otras vías razonablemente aplicables, tales como interdictos, amparos por mora, medidas cautelares, etc. (Cfme. RIVAS, Adolfo A., "El amparo y la nueva Constitución de la República Argentina", Revista La Ley t.1994-E-1330).

Conjuntamente con la idoneidad de la acción, se exige constitucionalmente que el acto u omisión impugnado, lesione, restrinja, altere o amenace en forma actual o inminente algún derecho constitucional, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.

2) ANÁLISIS DEL CASO:

2.1- Demanda: La Asociación para la Defensa de la Competencia, por medio de su apoderado, inició demanda contra el Estado Nacional -Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía- y contra todas las empresas enumeradas a fs. 1 *ter*, solicitando se prohíba la operación de concentración a que se refiere la Resolución SPE 148/2010 y/o se la subordine a la desinversión por parte de TELECOM ITALIA S.P.A. y TELECOM ITALIA INTERNATIONAL N.V. de todas las acciones que detentan directa o indirectamente en SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A., NORTEL INVERSORA S.A., TELECOM ARGENTINA S.A. y TELECOM PERSONAL S.A. En subsidio, se revoque la resolución impugnada y se dicte una nueva resolución. La demanda obra a fs. 1 *ter* a 50. En el punto V y VI (legitimación activa y procedencia de la acción) cita el conocido fallo del 24 de agosto de 2006 dictado por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en la causa caratulada: "CERVECERIA ARGENTINA S.A. ISENBECK s/Recurso de Queja", que habría habilitado la procedencia de la acción directa por parte de terceros afectados por restricciones al régimen de libre competencia. Sostiene que la demanda interpuesta es la única vía procesal disponible para garantizar el control judicial de la resolución impugnada (fs. 30). Desde fs. 32 vta. a 48 vta. fija lo que a su criterio son siete (7) causales de ilegalidad de la resolución impugnada. La primera se refiere a que la subordinación carece de plazo condición. La segunda a que el compromiso aceptado constituye un remedio ilícito. La tercera a que la resolución viola los lineamientos establecidos por la

USO OFICIAL

BOGADA
EPAC 1° 112 F° 451



Resolución 164/2001 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor. La cuarta a que el compromiso se aparta de los criterios rectores en materia de defensa de la competencia. La quinta a que el compromiso parte del falso presupuesto de que TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. y TELECOM ARGENTINA S.A. tienen incentivos para competir. La sexta a que la resolución viola el marco regulatorio y los pliegos de licitación de la privatización de ENTEL. La séptima y última, a que la resolución afecta el interés económico general y que resulta contradictoria con su antecedente Resolución 483/2009. A fs. 137/140 amplían la demanda y a fs. 192/193 reiteran tal ampliación referida al hecho nuevo de que TELECOM ITALIA había adquirido del denominado GRUPO WERTHEIN un 10% adicional de las acciones de SOFORA, controlante indirecto de TELECOM ARGENTINA, por lo que peticionaba también se ordene desinvertir a TELECOM ITALIA.

Respecto al confuso fallo citado por el demandante que dio lugar a opiniones encontradas por parte de la doctrina especializada, cabe manifestar que se refiere al derecho a denunciar que tiene toda persona, conforme al artículo 26 de la Ley 25.156 y que no es el caso en análisis.

En lo referente a la primera ilegalidad invocada (inexistencia de condición y de plazo), cabe manifestar que dentro del amplio espectro de condiciones que se puede fijar (suspensivas o resolutorias) solo en algunas procede la fijación de un plazo, no siendo éste exigible como en el presente caso en que consisten en abstenerse de ciertas conductas (cfme. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia", tomo 2, págs. 150 y sig., Editorial Heliasta, Bs. As. 2005). Solo podría considerarse que habría que poner un plazo de cumplimiento en el punto 2.1. de la cláusula segunda, referida a que la prohibición impuesta debía indicarse expresamente en el estatuto de TELCO. De todas maneras, su falta de previsión no nulifica la cláusula, ya que el fondo es la prohibición y la inclusión en el estatuto solo configuraría una forma instrumental de hacerlo.

La segunda invocación de ilegalidad (inutilidad del compromiso), no es una facultad de evaluar por terceros ajenos a la concentración y es resorte

exclusivo de la Autoridad de Aplicación, si bien existe la posibilidad del debido control judicial.

La tercera referida a la violación de los lineamientos de concentraciones (Res. 164/2001), cabe manifestar que estos lineamientos son solo normas orientativas imposibles de ser violadas (cfme. BONZON RAFART, Juan Carlos, "Defensa de la Competencia. Naturaleza mixta de la Ley 25.156. Tribunal de alzada competente que ejerce el debido control judicial de las resoluciones de la C.N.D.C.", Revista Doctrina Penal Tributaria y Económica N° 24 de agosto de 2012, Directora Dra. Teresa Gómez, Editorial ERREPAR, pág. 56).

La cuarta, quinta y sexta solo consignan hipótesis vagas e imprecisas, sin referirse a un daño concreto o potencial al interés económico general.

Por último la séptima hace una comparación inadecuada entre las Resoluciones 483/2009 y la ahora impugnada 148/2010, ya que la primera, al ser anulada por esta Sala por voto de la mayoría, carece de efectos jurídicos.

Por último, en la ampliación de demanda referida a la compra de acciones por parte de TELECOM ITALIA, ni siquiera el actor invoca eventual daño potencial a la competencia en el mercado argentino de las telecomunicaciones.

2.2- Transformación de la demanda de impugnación en acción de amparo: En atención a que el demandante invocó un derecho colectivo con sustento constitucional en el artículo 43 de la Carta Magna (fs. 26 vta./29), esta Sala, por unanimidad, transformó dicha demanda en una acción de amparo, por no existir un remedio judicial impugnativo más idóneo para los terceros que no han sido parte en el proceso de concentración (fs. 167/167 vta.). Se consideró, en mi opinión, que era el único remedio judicial para ejercer el debido control de un acto jurisdiccional administrativo, impugnado de manifiestamente ilegal y arbitrario.

Tuve oportunidad de desarrollar *in extenso* el tema de los límites y alcance de lo que debe entenderse por control judicial suficiente (voto del suscripto en la causa: "Incidente de apelación contra la Resolución 483/09, en autos principales: "PIRELLI & CS.P.A y OTROS S/NOTIFICACION ART. 8 LEY 25.156", de fecha 1° de febrero de 2010, registro 10 - folio 12/2010). Cabe solamente reiterar que la llamada "jurisdicción primaria" (jurisdicción

administrativa), para ser aceptada constitucionalmente, debe contar con un adecuado "control judicial suficiente".

2.3- Informe artículo 8° Ley 16.986 por parte del Estado Nacional: El extenso informe obra a fs. 228/275 y en él se propicia el rechazo de la acción intentada, con costas. Variados son los argumentos que sustentan tal petición. Cabe comentar en principio, que no se comparte lo sostenido de que es arbitraria la decisión de esta Sala de transformar la demanda de impugnación en acción de amparo. Como sostuve *ut supra*, por unanimidad esta Sala consideró que era la única vía idónea para impugnar la resolución. Lo sostenido en contra por el Estado Nacional, de que el demandante contaba con el recurso directo establecido por el artículo 53 de la Ley 25.156, se aparta de numerosos antecedentes en los cuales el mismo Estado sostiene lo contrario. Sin perjuicio de lo expuesto, el tratamiento de los argumentos del Estado sobre el tema, son en mi opinión intrascendentes atento que en el informe fundamenta y peticiona el rechazo del amparo cuestionado, con lo que se acepta implícitamente tal procedimiento. Sintetizando sus argumentos, puede decirse que el Estado Nacional considera improcedente el amparo, por no existir actualidad o inminencia de lesión de los derechos invocados por la actora, como asimismo, por no tratarse de un acto jurisdiccional manifiestamente ilegítimo o arbitrario. Por el contrario, se sostiene que los "remedios analizados en el Dictamen C.N.D.C. N° 835 son una herramienta correcta (tanto desde el punto de vista de la eficiencia como de la oportunidad), para corregir las fallas de mercado que produce la presente operación económica" y que "las obligaciones impuestas, siempre y cuando sean cumplidas estrictamente, son la única forma de garantizar la competencia en el largo plazo y restringir de la menor manera posible los derechos de las partes intervinientes" (fs. 270 vta.).

2.4- Demandas de AMX ARGENTINA S.A. y TELMEX ARGENTINA S.A.: A fs. 304/351 obran las demandas de AMX ARGENTINA S.A. y TELMEX ARGENTINA S.A., que prácticamente reproducen, por medio de sus apoderados, los argumentos de la demanda referida en el punto 2.1-. En forma similar la ampliación de demanda obrante a fs. 389/391.

2.5- Sentencia: A fs. 536/573 obra la sentencia de primera instancia por la cual se rechazan las pretensiones de las actoras con costas. De sus extensos considerandos surge claramente, en mi opinión, que el *a quo* sostiene que el compromiso ofrecido por las partes y aceptado por la autoridad de aplicación, luce razonable a los fines de garantizar la independencia de TELECOM ARG. S.A. y TELEFONICA ARG. S.A. y también la falta de probanzas sobre su incumplimiento o ineficacia para cumplir su cometido, siendo por ello legítimo. Opina asimismo en su considerando 72, que nada obsta a que la parte actora recurra al procedimiento reglado por los artículos 26 y siguientes de la Ley 25.156, denunciando hechos concretos y no meras conjeturas y discusiones teóricas como las formuladas en las demandas.

2.6- Apelación de la Asociación para la Defensa de la Competencia: A fs. 579/616 obra la apelación de la sentencia y se denuncia denegación de justicia.

El primer agravio se refiere a que la sentencia del *a quo*, al disponer la improcedencia del amparo, viola la sentencia de esta Sala recaratulando la vía intentada, configurando tal situación una manifiesta denegación de justicia.

El segundo agravio se relaciona con la omisión de ordenar el traslado de la demanda a las empresas involucradas.

El tercer agravio se refiere a que la sentencia desconoce la influencia sustancial de TELEFONICA S.A. sobre TELECOM ARG. S.A.

El cuarto agravio se refiere a que la sentencia ignora el propósito y la lógica regulatoria del control previo de las concentraciones económicas.

El quinto agravio se relaciona con la comprobación de los efectos monopólicos de la concentración.

El sexto agravio se relaciona con el resultado descabellado de la aceptación del compromiso no aceptado por el *a quo*.

El séptimo agravio se refiere a que la falta de plazo para el cumplimiento del compromiso es considerado por el *a quo* legal.

El octavo agravio se relaciona con la opinión del *a quo* de que el compromiso aceptado se ajusta a los criterios rectores en materia de competencia.

El noveno agravio se refiere a los incentivos para competir entre TELEFONICA ARG. S.A. y TELECOM ARG. S.A.

El décimo se refiere al supuesto fracaso o incumplimiento del compromiso.

El undécimo agravio se relaciona con el eventual incumplimiento de las recomendaciones regulatorias efectuadas por la C.N.D.C.

El duodécimo agravio se refiere a la arbitrariedad de la sentencia y a su afectación al interés económico general.

El último agravio (13° aunque el apelante lo consigna como 14°), se refiere a la imposición de costas.

En mi opinión, salvo el agravio 13°, carecen de argumentación crítica y concreta de la sentencia de primera instancia, limitándose a exponer la disconformidad con la misma, mediante similares argumentaciones que las obrantes en las demandas.

2.7- Contesta agravios del Estado Nacional: A fs. 677/718 obra la contestación de agravios por parte del Estado Nacional. En primer lugar se agravia porque el *a quo* no hizo lugar al traslado solicitado por esa parte. En el presente caso el defecto procesal que podría afectar en principio el derecho de defensa no se da, porque tal como lo reconoce la propia parte, pudo contestar en debida forma y tiempo el recurso (fs. 677 vta.).

Respecto al recurso interpuesto, solicitó se declare el mismo desierto por falta absoluta de argumentación crítica y concreta de la sentencia apelada. En subsidio, contestó cada uno de los agravios y solicitó se rechace el recurso con expresa imposición de costas.

Por todo lo expuesto en los puntos precedentes voto por:

1. Confirmar lo resuelto a fs. 573, salvo en sus puntos dispositivos V y VI.
2. Imponer las costas en el orden causado, en virtud de considerar que existió razón fundada para litigar.

Por lo que **SE RESUELVE:**

Por unanimidad, **I) CONFIRMAR** la resolución apelada en cuanto no hace lugar a las demandas;

II) REVOCAR la resolución apelada en cuanto impone costas al vencido, disponiendo que las mismas deben correr por su orden.

Poder Judicial de la Nación



Por mayoría, **III) LIBRAR** oficio a la Secretaría de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que por intermedio de ese tribunal se curse una comunicación al Poder Ejecutivo Nacional a fin de que proceda a integrar el organismo que debe aplicar y controlar el cumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia.

Regístrese, notifíquese, y devuélvase

EDMUNDO S. HENDLER
JUEZ DE CAMARA

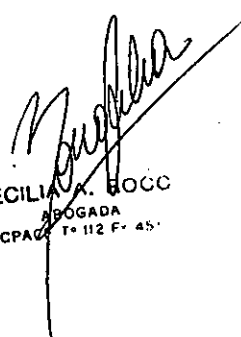
JUAN M. P. REPETTO
JUEZ DE CAMARA

JUAN CARLOS BONZON
JUEZ DE CAMARA

USO OFICIAL

ANTE MI

MARIA MARTA NOVATTI
SECRETARIA


CECILIA A. BOCC
ABOGADA
CPA 112 F. 45